

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, 6 de Mayo de 1874.—Vista la causa instruida contra Crispin y Praxedis Barroso, por circulacion de moneda falsa; la sentencia de 1ª instancia pronunciada por el Juez de Distrito de Guanajuato fecha 8 de Marzo del año próximo pasado que declaró; primero: es de absolverse á Crispin Barroso de los cargos de circulacion y portacion de moneda falsa y posesion de útiles para fabricarla; segundo: que es de condenarse y se condena á Praxedis Barroso á la pena de un año de prision contado desde el 2 de Enero del presente año, por el delito de posesion de útiles propios para elaborar moneda falsa de que se le hizo cargo; tercero: póngase en libertad á Crispin Barroso bajo fianza ó simple caucion protestatoria si no tuviere fiador. Vista la de 2ª instancia pronunciada por el Tribunal de Circuito de Querétaro en 19 de Abril del año anterior, por la que se falló confirmando la sentencia del inferior en cuanto á la absolucion de Crispin y condena de un año para Praxedis, y adicionándola respecto del citado Crispin, declarando: que se le dá por purgado con el tiempo que ha sufrido de prision, el delito de complicidad con las monederos falsos que le resulta por los medios de cobre que se le encontraron. Visto lo pedido por el Sr. Procurador general interino con todo lo demas que de autos consta, se tuvo presente y ver convino.

Considerando: que de autos no consta justificado plenamente el delito de portacion de moneda falsa; que no basta para comprobarlo, la tenencia de algunas de esas monedas en poder de los encausados, porque la simple portacion de monedas falsas no es delito, mientras esa portacion no sea maliciosa, cuya circunstancia no aparece justificada.

Que respecto de las cajas de vaciar y fuelle que se encontró al tiempo del cateo, esos objetos se hallaron en la casa de que era jefe de la familia Praxedis Barroso, el cual

no ha probado en el curso de la averiguacion la legitimidad con que poseía y guardaba esos objetos.

De conformidad con lo pedido por el Sr. Procurador general interino, con fundamento de la ley de 19 de Noviembre del año de 1841, vigente al tiempo de la comision de los hechos á que esta causa se refiere, de la 12, tít. 14 partida 3ª, la 26 título 19 partida 7ª, y demas fundamentos en que descansa el fallo de 1ª instancia, se declara, que es de confirmarse y se confirma en todas sus partes la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito de Guanajuato en 3 de Marzo del año próximo pasado.

Devuélvanse las actuaciones al Tribunal de Circuito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes. Hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Sres. Presidente y Magistrados que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmanon.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*Simon Guzman.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, 6 de Janio de 1874.—*Alejo Gomez Elguarte*, oficial segundo.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de México, por el Dr. D. José de la Sancha y Céspedes, contra los procedimientos del Juzgado 1º de lo Civil, por violacion de garantías.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez 2º de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el presente recurso de amparo interpuesto por el Dr. D. José M. de la Sancha y Céspedes con-

tra los procedimientos del Juzgado 1º de lo Civil, fundándose en que este está siguiendo la forma hipotecaria en el juicio que le ha promovido D. Cayetano Rubio, exigiendo el pago de un capital que reconoce la hacienda del Sr. Sancha en el Estado de Hidalgo; y teniendo presente el informe del Juez 1º de lo Civil, y los documentos que acompaña, hace el que suscribe al Juzgado, que la cuestion varia del aspecto bajo el que la presentó el quejoso.

En efecto, subrogado el Sr. Rubio en los derechos del Fisco á ese capital, como resultado del expediente gubernativo, en el que se oyó al Sr. Sancha, concediéndole diversos plazos para que justificara haber redimido en tiempo hábil el capital que reconoce la finca rústica de su propiedad, se otorgó la escritura de subrogacion en los derechos del fisco en 18 de Diciembre de 1872. Esta escritura cedida por el denunciante al Sr. Rubio, anotada en el registro público en Enero de 1873, es el título con el que ha entablado dicho Sr. Rubio el juicio hipotecario contra dicho Sr. Sancha, título que solo podia producir todos sus efectos desde la fecha de su registro, que fué en Febrero del año anterior próximo pasado de 1873.

De consiguiente, la accion intentada por el cesionario, estaba ya bajo las prescripciones del nuevo Código civil de procedimientos, y el Juez 1º de lo civil debió sujetarse á él, en la sustanciacion del juicio.

Por esta razon, el que suscribe cree no comprender el presente caso, ni poderse aplicar á él como en otros de circunstancias muy diversas, el artículo 14 de la Constitución, deduciendo el Dr. Sancha de su letra su violacion, fundamento del amparo que impetra. En tal virtud, el Promotor fiscal pide al Juzgado se sirva declarar: que la Justicia de la Union no protege ni ampara al Dr. D. José M. de la Sancha y Céspedes, contra los procedimientos del Juez 1º de lo Civil, en el juicio hipotecario que sigue D. Cayetano Rubio contra dicho Sr. Sancha, exigiéndole el pago del capital que

dicho Sr. reconoce en su finca rústica nombrada Texcaltitla, por no haber violacion del artículo 14 de la Constitución.

México, 20 de Enero de 1874.—*Lic. J. Viviano Beltran.*

Es copia que certifico.—*F. de A. Osorno*, secretario.

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

México, 12 de Marzo de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido por el Dr. D. José M. Sancha y Céspedes, quejándose de que en el juicio hipotecario seguido ante el C. Juez 1º del ramo civil de esta Ciudad á pedimento de D. Cayetano Rubio, resulta violada en perjuicio del mismo Sancha, la garantía que otorga el artículo 14 de la Constitución federal por haber admitido y continuado dicho juicio, con arreglo al Código Novísimo de procedimientos, al que solo le dá efecto retroactivo, aplicándolo á un contrato celebrado antes de su promulgacion. Vistos: el informe dado por dicho funcionario y las constancias á que se refiera y forman parte del expediente instruido en la secretaría de Hacienda en aveguacion sobre si estaba ó no redimido el capital de siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos cincuenta centavos y pagados los correspondientes réditos que se reclaman al Dr. Sancha como propietario de la hacienda de Texcaltitla, ubicada en Estado de Hidalgo; lo que alega en su defensa el Lic. Diego German y Vazquez; lo pedido por el representante del Ministerio público y todo lo demas que resulta de autos á que en lo sucesivo me refiero y considerando:

Primero: que el pago de la cantidad exigida al Dr. Sancha, trae origen de un contrato celebrado en el año de 1850, en cuya fecha hipotecó especialmente la mencionada finca, para garantizar el cumplimiento de las obras pías, que señaló la finada Dª Rafaela Hernandez.

Segundo: que bastaría atender á la fecha

en que se constituyó la hipoteca, á la legislación que entonces estaba vigente, y á las sustanciales alteraciones á que la sujeta el Código Novísimo de procedimientos, para deducir necesaria y jurídicamente que no es aplicable al negocio de que ahora se trata, sin limitar los medios de defensa, cuya circunstancia es tanto mas atendible, cuanto que la principal excepcion de las cuatro que únicamente permite el mencionado Código no se ha debatido con la amplitud suficiente hasta fijar el mérito que tenga en rigor de derecho.

Tercero: que los autores que tratan de la retroactividad (Malheir de Chassat, tomo 1º sección 7ª párrafo 2º artículo 3º. Meyer, cuestiones transitorias, página 55. Dailoz, repertorio, palabra Lois, capítulo 4º número 383 y 384) adoptan la distincion generalmente recibida entre el procedimiento ordinatorium litis y desisorium litis, viniendo en que existe real y verdadera retroactividad, cuando en la aplicación de la ley posterior al hecho, se perjudican derechos adquiridos, como indudablemente sucedería en el juicio iniciado á solicitud de D. Cayetano Rubio, en el que llegada la vez, habría necesidad de rematar la hacienda de Texcaltitla con grave y notorio quebranto de los bienes del Dr. Sancha, quien es seguro no debió temerlo si esa finca se vendia en almoneda segun las prescripciones de la ley vigente en 1850, que con sus concordantes debió servir de base para la celebracion del contrato.

Cuarto: que el Código de procedimientos ademas de las innovaciones que introdujo en el derecho hipotecario, tiene un enlace tan perfecto con el que acerca de la misma materia fijó el Código civil, que no es posible aplicarse aquel sin afectar en su esencia lo estipulado entre los contrayentes, resultando por consecuencia necesaria, violada la garantía que se reclama.

Quinto: que esta opinion se encuentra repetida en diversas ejecutorias de nuestros tribunales, al fijar por la interpretacion doc-

TOMO VI.—PARTE II.

trinal la genuina inteligencia del artículo constitucional citado.

Sexto: que la escritura de subrogacion que presentó D. Cayetano Rubio, aunque bastante para legitimar su personalidad, carece de fuerza ejecutiva, si este no prueba la causa de deber, cuya opinion sostenida por autorizados jurisconsultos, se encuentra sustancialmente reproducida en la ley de 20 de Abril de 1872.

Sétimo: que examinadas escrupulosamente las constancias de autos, y comparando cada una de ellas con las prescripciones contenidas en los artículos 1403 del Código civil y 910 del Novísimo de procedimientos, aplicable al presente caso, segun la opinion del C. Juez 1º Lic. Juan María Maldonado, se puede asegurar que no existe consentimiento expreso ni presunto por parte del Dr. Sancha que haga aceptable la forma del juicio que sostiene el mencionado funcionario.

Por los fundamentos expuestos, por los demas de que hace mérito en su alegato el C. Lic. Diego German y Vazquez, y con arreglo á lo prevenido en el artículo 14 de la Constitucion general y á la ley de 20 de Enero de 1869, debia declarar y declarar: que la Justicia de la Union ampara y protege al Dr. D. José María de la Sancha y Céspedes, contra el acto que dió origen á este recurso. Notifíquese la sentencia, y hecha su publicacion en los periódicos Diario Oficial y Semanario Judicial, dese cuenta con las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.

El C. Juez 1º de Distrito, lo mandó y firmó. Doy fé.—*José A. Bucheli.*—*H. de A. Osorno.*

Es copia que certifico.—*H. de A. Osorno*, secretario.

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Mayo 7 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el Dr. D. José María de la Sancha y Céspedes, ante el Juzgado 2º de Distrito, contra los procedimientos del C. Juez 1º de lo civil de esta Capital, en el juicio hipotecario que le ha promovido D. Cayetano Rubio, como cesionario en los derechos de D. Agustín Cosío, á un capital que el Ejecutivo de la Unión le subrogó y el cual reconocía el Dr. Sancha sobre un Rancho de su propiedad, llamado Texcaltitla; con cuyos procedimientos juzga el quejoso se infringen en su persona las garantías del art. 14 constitucional, alegando para ello que en virtud de haber pagado con anterioridad á las leyes de Reforma el capital en cuestion, el juicio en que se definan los derechos adquiridos por él, ó los derivados de la operación que el Gobierno practicó con Cosío, debe sujetarse á las prevenciones del derecho anterior al Novísimo Código, para no perjudicarlo los que adquirió por la escritura de 31 de Mayo de 1850.

Visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado, en que entre otras razones expone: que cree no se viola el art. 14 constitucional alegado, porque la acción de Rubio se funda en la escritura de cesión de derechos que el Ejecutivo otorgó á Cosío y éste cedió á Rubio, cuyo acto se verificó con posterioridad á la promulgación del Código de procedimientos. Visto el pedimento fiscal oponiéndose á que se otorgue el amparo; la sentencia del C. Juez 1º de Distrito por recusación del 2º; las copias de las escrituras que obran en autos, y todo cuanto mas consta y se tuvo presente, y

Considerando: que el título de la acción entablada por Rubio, no es ni puede ser la escritura de cesión, porque ésta solo funda el título de personalidad, sino la escritura de imposición del capital sobre el rancho de

Texcaltitla, y ésta fué otorgada en el año de 1850.

Que la legitimidad ó ilegitimidad de las excepciones alegadas por Sancha, debe resolverse en el juicio respectivo conforme á las leyes anteriores y de ninguna manera limitarse á los términos prevenidos por el Código citado; pues con esos procedimientos se infringe el art. 14 de la Carta fundamental, dando efecto retroactivo al mismo Código.

Por estas consideraciones, y por los propios legales fundamentos y consideraciones en que se apoya la sentencia del C. Juez 1º de Distrito, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la referida sentencia, que declaró: que la Justicia de la Unión ampara y protege al Dr. D. José María de la Sancha y Céspedes, contra los actos que dieron origen á este recurso.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José María Lozano.—Ignacio Ramírez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—Simón Guzmán.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Marzo 26 de 1874.—*Lic Emilio Ordáz*, oficial mayor.